

UNA APORTACIÓN CRUCIAL A LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS DE LA GUERRA CIVIL

Enrique Moradiellos
(Universidad de Extremadura)

Reseña de: José Ángel Sánchez Asiaín, *La financiación de la guerra civil española. Una aproximación histórica*, Barcelona, Crítica, 2012, 1309 páginas.

La dimensión económica de la guerra civil española de 1936-1939 nunca ha sido una faceta muy transitada por la historiografía especializada en la contienda, ni la propiamente española ni la extranjera. A tenor del magno estudio bibliométrico realizado en el sesenta aniversario del inicio del conflicto (*Bibliografías de la Historia de España*, nº 7, Madrid, CINDOC-CSIC, 1996), el equipo dirigido por Juan Andrés Blanco Rodríguez calculaba que sólo un 3,5 por ciento de toda la producción existente sobre el tema (1,848 libros y 1.749 artículos), tenía que ver con la “economía de guerra” (el 5,3 por ciento si añadimos a la misma el capítulo de “colectivizaciones”). Se trata de un porcentaje muy reducido que estaba muy por debajo de otras dimensiones históricas mucho más trabajadas por la historiografía: el capítulo memorialístico (en torno al 20 por ciento); el de “Aspectos culturales e intelectuales” (con el 19,8 por ciento); el de “Política interior” (con un 19,5 por ciento); y el de “Proyección Extranjera” (con el 19,4 por ciento). Y esa desproporción en la atención prestada a las cuestiones económicas es todavía más relevante y sorprendente si se tiene en cuenta que una gran parte de esa historiografía estaba muy influida por las corrientes filosóficas marxistas o sociológicas que consideraban a la “infraestructura económica” como el fundamento real y decisorio del perfil “superestructural” de la dinámica social, de la vida política y del universo cultural de las sociedades humanas.

A título meramente ilustrativo, el influyente y muy traducido ensayo del hispanista Gerald Brenan sobre la contienda (*El Laberinto español*, Cambridge, Cambridge University Press, 1943), apostaba sin duda por la primacía de las motivaciones económicas a la hora de tratar de explicar el fenómeno bélico, aunque su análisis se centraba en factores socio-políticos y culturales fundamentalmente: “La obstinación de las clases ricas españolas en no ceder ni una pulgada en esta cuestión (la reforma agraria latifundista) ha sido desde luego la causa primera de la guerra civil” (p. 151 de la edición española traducida y publicada en París por Ruedo Ibérico en 1962). Y más de medio siglo después, un afamado trabajo del profesor Jordi Palafox (*Atraso económico y democracia*, Barcelona, Crítica, 1999, pp. 295-296), reincidía en esa misma interpretación de base última económica para explicar “el fracaso” de la experiencia democrática republicana:

Inconscientes los dirigentes políticos progresistas de la Segunda República de la gravedad de las tensiones acumuladas, de las implicaciones del aumento de los salarios en una economía con muy baja productividad y de que la tensa coyuntura de la Europa de los años treinta estaba en contra de un proyecto de modernización económica en un marco político de democracia parlamentaria, prestaron muy poca atención a las dificultades económicas a las que se enfrentaban y a las medidas que estaban aplicando en otros países para combatir problemas que, si bien respondían a causas diferentes, tenían las mismas, si no más graves, consecuencias, debido al bajo nivel de vida de un sector amplio de los ciudadanos y a la ausencia de tradición democrática en la sociedad española. E inconscientes los dirigentes conservadores de que el cambio experimentado por ésta hacía imposible un retorno a la situación previa sin la utilización de las armas, se obcecaron en gobernar como si nada hubiera cambiado. Lo que ocurrió a partir de febrero de 1936, y de manera mucho más evidente desde julio de ese año, demostraría, con mayor contundencia todavía que la evolución desde abril de 1931, los importantes, quizá

insalvables, obstáculos que impone el atraso (económico) a la consolidación de un marco de convivencia democrático, plural, tolerante y progresista.

Desde aquellos años de mediados de los noventa del siglo pasado, el escenario historiográfico descrito ha sufrido cambios muy apreciables al compás de la aparición de nuevos estudios de historia económica que han ido alumbrando el panorama bélico de una manera clara y cada vez más diáfana. En este campo, las contribuciones más señeras y actualizadas se deben a la labor de dos equipos fundamentales (y en algún caso con autores reincidentes). El primero, un grupo dirigido por Pablo Martín Aceña y Elena Martínez Ruiz que al frente de otros ocho colaboradores editaron en el setenta aniversario del inicio de la contienda un espléndido volumen de trabajos generalistas y sectoriales titulado *La economía de la guerra civil* (Madrid, Marcial Pons, 2006, 519 pp.). Y el segundo, un magno grupo dirigido por el ya fallecido Enrique Fuentes Quintana y coordinado por Francisco Comín Comín, compuesto por unos cuarenta expertos en la materia, que fueron los responsables dos años de después de otro exhaustivo y denso estudio titulado *Economía y economistas españoles en la guerra civil* (Madrid, Academia de Ciencias Morales y Políticas/Galaxia Gutenberg, 2008, 2 vols., 1140 pp.).

José Ángel Sánchez Asiaín (Baracaldo, Vizcaya, 1929), prestigioso catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal ya jubilado, era uno de los contribuyentes más destacados de la obra dirigida y coordinada por los profesores Fuentes Quintana y Comín Comín. Y lo era porque ya años atrás había firmado un notable trabajo de síntesis sobre la cuestión muy bien recibido por la crítica especializada que llevaba por título *Economía y Finanzas en la Guerra Civil Española* (Madrid, Real Academia de la Historia, 1999, 382 pp.). Siguiendo y culminando esa estela previa de investigaciones, su última contribución al tema es un voluminoso libro llamado a convertirse en una pieza clásica y canónica de la literatura económica sobre la contienda de 1936-1939 por muchas y bien fundadas razones: *La financiación de la guerra civil española. Una aproximación histórica* (Barcelona, Crítica, 2012, 1309 pp.).

En el prólogo de su obra, Sánchez Asiaín reconoce algo ya señalado como evidente: mientras que las dimensiones políticas, sociales, culturales e internacionales de la guerra civil están muy estudiadas por la historiografía y son bastante conocidas en sus líneas generales y en muchos de sus detalles, no ocurre lo mismo en absoluto con su faceta económica. Y este patente desequilibrio no deja de ser una grave carencia historiográfica porque, siguiendo a Hugh Thomas, Sánchez Asiaín recuerda que el resultado final de la contienda, definido por la victoria incondicional del bando franquista y la derrota sin paliativos del bando republicano, tuvo mucho que ver con “cuatro razones primordiales” concatenadas: la mayor “unidad política” lograda por el primero frente al segundo; la “ayuda exterior superior” obtenida por aquél frente a éste; la mejor conducción de las operaciones militares por parte franquista frente a sus enemigos; y, finalmente, las razones económicas que tuvieron que ver con “una mejor administración de los recursos” disponibles por parte de los postreros vencederos frente a los finalmente vencidos.

El trabajo realizado en esa voluminosa obra quiere ser una aportación documentada al conocimiento, en toda su complejidad, de esa faceta económica y financiera de la guerra civil de 1936-1939, con los necesarios excursos sobre la situación previa (el quinquenio republicano de 1931-1936 y el impacto de la Gran Depresión internacional en España) y la posterior (la primera postguerra y los reajustes obligados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial). Y hay que decir sin ambages que el autor consigue su propósito con creces gracias a un total de 25 capítulos muy densos y prolijos que abordan sucesivamente el escenario económico-financiero de preguerra, las fuentes de financiación de la

conspiración (desde Juan March a la crucial ayuda portuguesa), la debacle económica revolucionaria en zona republicana, la militarización y centralización económica en zona insurgente, los aspectos financieros de la contienda en ambas retaguardias y en el extranjero y, finalmente, el trágico devenir del tesoro del exilio republicano y la dificultosa restauración de la unidad económica nacional en la postguerra. Para completar el estudio, el autor añade como complemento un total de trece anexos documentales de sumo interés (desde el acta oficial del acuerdo entre los monárquicos y Mussolini para financiar sus actividades conspiratorias en marzo de 1934 a los acuerdos hispano-franceses de febrero de 1939 para la restitución al gobierno franquista de todos los bienes españoles expatriados durante la contienda).

Por lo que respecta al modo y manera en que cada bando contendiente financió sus actividad bélica, el juicio final de Sánchez Asiaín corrobora de manera ya definitiva las impresiones, avances e hipótesis adelantadas por otros autores previos y señeros (desde Ángel Viñas Martín a Pablo Martín Aceña, a título de ejemplos más notorios). En este sentido, además de confirmar que “el volumen de recursos requerido por cada parte fue verdaderamente alto, y no fue muy diferente en términos cuantitativos”, Sánchez Asiaín también corrobora esas diferentes vías de financiación de manera muy precisa y atinada:

La República consumió las notables reservas de oro acumuladas por España a lo largo de muchísimos años, y el Gobierno de Burgos, que carecía de ese oro, se endeudó en el exterior en un volumen parecido. A grandes trazos, y simplificando mucho, puede decirse que, en una parte importante, la República pagó el coste de la guerra civil con cargo al ahorro que los españoles habían acumulado en el pasado, y que el Gobierno de Burgos lo financió con el ahorro futuro. Con lo que los españoles se iban a ver obligados a dejar de consumir en los años sucesivos para satisfacer esa deuda de guerra. (...)

La asistencia italiana osciló entre un máximo de 3.914 millones y un mínimo de 3.327 millones de pesetas. Y la alemana entre 2.104 y 1.932 millones de pesetas. (...) La realidad es que superó los 6.000 millones de pesetas, equivalentes a 700 millones de dólares. Cifra muy parecida, casi idéntica, al valor de las reservas oro que salieron del Banco de España. (pp. 63-64 y 869).

En este aspecto estrictamente financiero, quizá entre los mayores méritos del trabajo realizado por Sánchez Asiaín haya que destacar varios puntos fundamentales por la novedad de sus fuentes documentales probatorias y por la sutileza del análisis realizado sobre esas temáticas.

Ante todo, por lo que respecta al bando franquista, es muy destacable la minuciosa reconstrucción realizada de las bases financieras de la conspiración militar y de los primeros compases de la insurrección siguiendo tres vías cruciales y concatenadas: la oportuna aportación del carlismo navarro y de las haciendas forales, el apoyo vital de Juan March y su enorme fortuna personal, y la inmediata ayuda del gobierno portugués (“realmente importante y generosa”, p. 237) y de Salazar en particular. Sobre este último e inédito aspecto (no siempre destacado por la historiografía), Sánchez Asiaín apoya sus conclusiones en la consulta del diario de la Secretaría del propio dictador portugués, con revelaciones tan pertinentes como la siguiente:

La tesis sobre una posible convocatoria de Salazar a los banqueros (para prestar apoyo a los insurgentes) se apoya en la más absoluta lógica. Sin embargo, el autor no ha podido documentar por el momento que tal convocatoria existiera. Al menos desde el punto de vista formal. (...) Pero no existe ninguna duda de que Salazar estaba en permanente contacto con los conspiradores y con los banqueros. El mismo 17 de julio de 1936 a la extraña hora de las 22:45, recibió al presidente del Banco Espíritu Santo, Ricardo Espírito

Santo, y al día siguiente, 18 de julio, recibió al general Sanjurjo y al marqués de Quintanar (p. 239).

En segundo orden, por lo que respecta al bando republicano, es muy destacable el relato de la magnitud del “desbarajuste financiero” ocasionado por la insurrección y la propia guerra, que llegó a originar “una inflación que en algún momento llegó hasta el 900%” en la sufrida retaguardia republicana, azotada por la escasez de bienes tanto como por la carestía de precios (p. 281). Si la venta de las reservas de oro (a Francia, en un tercio; y a la Unión Soviética, el resto) y plata (a Estados Unidos) sirvió para financiar la compra de armamentos, alimentos y petróleo, lo cierto es que la política financiera republicana careció de cualquier otra capacidad notable para generar otras fuentes de financiación en virtud de su grave fragmentación (“era en realidad una aglomeración de múltiples repúblicas independientes”, p. 371), del acoso financiero enemigo (“la guerra monetaria del gobierno de Burgos” fue realmente fructífera, cap. X) y de la alteración radical de su vida económica previa (“en la mayor parte del territorio republicano no había empresarios, ni beneficios, ni ordinarios, ni extraordinarios” para gravar o requisar, p. 535).

Al margen de la atención prestada a las finanzas, el estudio de Sánchez Asiaín también aborda con sumo lujo de detalles las características de los dos “modelos económicos” implantados en las respectivas retaguardias combatientes una vez rota en mil pedazos la unidad de mercado nacional tras la conversión del golpe militar en una guerra civil en la fatídica segunda mitad de julio de 1936. A este respecto, es de particular interés atender a dos consideraciones muy bien argumentadas por el trabajo que tienen indudable importancia para la historiografía de la contienda en términos generales y no sólo económicos.

En primer lugar, se remarca de manera explícita la profunda intensidad de la crisis económica sufrida por España en vísperas de la contienda, algo no siempre bien subrayado por la historiografía y que sin duda azuzó la polarización política y agravó el odio social que fueron condiciones de posibilidad de la propia guerra civil. No en vano, según los datos manejados por el autor, la primera mitad del año 1936 fue verdaderamente una sucesión de tragedias económicas para España en su conjunto: la cifra de parados se elevó en febrero a más de 843.000 trabajadores, casi un 10 por ciento de la población activa laboral (dos tercios procedentes del sector agrícola, eje de la conflictividad socio-laboral durante el quinquenio republicano); el índice de producción industrial pasó del 86,9 en 1935 al 76,9 en marzo del 36 (tomando como base 100 el año 1929; clara demostración de que la agudización de la depresión era un hecho incontrovertible); el volumen de contratación de valores bursátiles en junio no alcanzaba los 2/3 del volumen registrado en enero de 1936; y por lo que respecta al comercio exterior, el país estaba a principios de aquel verano en una situación de “tácita suspensión de pagos de España en los mercados internacionales”(pp. 27-28).

En segundo orden, se incide en el hecho de que la radical división en dos mitades del país definió un panorama económico de dislocaciones, rupturas y fragmentaciones mayúsculo y, en general, muy lesivo para ambos bandos contendientes: si uno conservaba la mayoría de las zonas mineras, el otro dominaba la mayoría de los sectores transformadores; si uno capturaba las zonas de excedentes productivos alimenticios, el otro se hacía con el control de las zonas mayormente pobladas; si uno tenía en su poder las áreas de alta capacidad de ahorro, el otro disfrutaba de las áreas productivas necesitadas de financiación, etc. Baste pensar que, a finales de julio de 1936, la zona republicana agrupaba al 60 por ciento de la población española mientras que la zona enemiga sólo albergaba al 40 por ciento de los 25 millones de habitantes censados. A pesar de ese desnivel demográfico,

la zona republicana sólo controlaba el 30 por ciento de las zonas productoras agrícolas en tanto que sus enemigos dominaban el 70 por ciento restante (incluyendo dos tercios de las reservas y capacidad de producción triguera y más de dos tercios de la producción de patatas, sin ir más lejos). En el plano industrial, si bien la República lograba mantener bajo su teórica soberanía un 80 por ciento de la producción industrial (y sus enemigos sólo controlaban el otro 20 por ciento), también perdía el control de las zonas mineras de procedencia de las materias primas industriales: el 75 por ciento de la producción de mineral de hierro quedó en poder de los sublevados, así como la casi totalidad de la producción de cobre, en tanto que la producción de carbón quedaba encerrada en una Asturias sitiada e incomunicada con el resto del territorio gubernamental.

En esas circunstancias descritas de precario equilibrio de fuerzas y capacidades, materiales tanto como humanas, la pequeña ventaja favorable al gobierno de la República frente al enemigo fue muy pronto anulada y revertida. En palabras de Sánchez Asiaín:

A los once meses (del inicio de la guerra civil), los sublevados contaban ya con el 70% de territorio, el 60% de la población, el 68% de la marina mercante, el 80% del acero, el 67% de la producción de cemento, y el 66% de la de explosivos. (p. 34).

Quizá la mayor importancia historiográfica del trabajo de Sánchez Asiaín consista en subrayar que ese cambio crucial operado no fue sólo debido a los apoyos exteriores de cada bando o a sus capacidades militares, diplomáticas o culturales. Fue sobre todo debido a “la gran diferencia, no suficientemente estudiada ni destacada en términos de su contribución al éxito militar” (p.35) entre las respectivas políticas económicas adoptadas y ejecutadas por ambos contendientes. Dicho en resumidas cuentas, Sánchez Asiaín sostiene que el modelo de gestión económica aplicado por el bando de Franco, junto a los otros factores ya señalados, le permitió ganar finalmente la guerra a pesar de la desventaja inicial de recursos porque generó mayores dosis de eficacia administrativa, fue más coherente en la disposición de los recursos y tuvo mejores resultados productivos y financieros que el modelo de gestión económica aplicado por sus enemigos republicanos. En otras palabras quizá más breves y certeras: el bando franquista consiguió organizar muy pronto una verdadera “economía de guerra” para hacer frente eficazmente a los desafíos de una “guerra total” que exigía centralizar la gestión de los recursos internos o externos disponibles en beneficio exclusivo del esfuerzo bélico y de las necesidades del frente de combate, sin distracciones, divisiones, experimentaciones ni despilfarros gratuitos.

A lo largo del trabajo, Sánchez Asiaín opone casi sistemáticamente los “dos modelos económicos” enfrentados durante la guerra en todas y cada una de las facetas de la actividad económica y financiera que la contienda alteró y obligó a reconfigurar de manera urgente y perentoria (la producción agraria o industrial, el crédito bancario, la circulación monetaria, el sistema fiscal, la asignación de recursos presupuestarios, la disciplina laboral, las incautaciones y confiscaciones de propiedades particulares, el comercio exterior, etc.).

Según su atinado análisis, el modelo republicano estuvo gravemente condicionado por la intensa revolución popular amorfa y desigual que azotó a su retaguardia e impidió al “Gobierno republicano desarrollar una política económica coherente” porque introdujo “enorme confusión”, imposibilitó “la más mínima programación” y supuso la aparición de no menos de “seis gobiernos con plenos poderes” (pp. 37 y 339) actuando cada uno por su cuenta y riesgo (emitiendo moneda propia, practicando medidas económicas antagónicas, legislando de manera autónoma, etc., sobre todo en Cataluña, Euskadi, Aragón, Asturias y Santander). Sólo parcialmente en 1938, bajo el gobierno presidido por Juan Negrín y cuando la situación militar se había decantado decididamente en contra de la causa

republicana, fue posible empezar a superar esas lacras y servidumbres de manera tentativa. Sólo así se explican fenómenos muy gravosos para la buena marcha de la guerra como la indisciplina monetaria que ocasionó la altísima inflación desatada en la retaguardia (“a finales de 1937 más de 2.000 organizaciones diferentes habían emitido casi 10.000 billetes y medio centenar de monedas metálicas”, p. 367) y la virtual pérdida de todo valor internacional de la peseta republicana (“la cotización en París cayó desde los 26,3 francos por 100 pesetas en julio de 1938 a 2,1 francos en febrero de 1939”, p. 445). También así se explica el desplome de la producción industrial registrado en zona republicana: de un valor 100 para 1935 en 15 provincias bajo control republicano, el nivel cayó hasta el 28,1 en el año 1938, lo que implica una reducción superior al 70 por ciento de sus efectivos iniciales (p. 395). Y todavía peor fue la evolución de la producción minera carbonífera que permaneció en poder republicano hasta la caída de Asturias en octubre de 1937: se desplomó un 60% en el año 1936 respecto del año anterior prebélico y en el año siguiente “fue prácticamente nula” (p. 280).

Por el contrario, el modelo económico implantado por el bando franquista se caracterizó por una centralización total de su poder decisorio en manos militares y de técnicos especialistas subordinados, con la intención de crear una economía militarizada al servicio exclusivo de las necesidades del frente de combate. La consecuente intervención militarizada afectó a todos los sectores productivos y a todos los agentes socio-laborales implicados, tal y como si fueran soldados movilizados bajo una disciplina férrea y con el único objetivo de producir más y mejor para ganar la guerra. El éxito acompañó a esos esfuerzos y buena prueba de ello es el perfil evolutivo de la producción industrial en 23 provincias bajo control sublevado desde el comienzo de la guerra: “el valor de esas provincias alcanzó prácticamente el nivel de preguerra en 1938”, incluyendo aquí a la producción minera asturiana que había sido nula en 1937 y que, tras la ocupación franquista, retornó en 1938 al 75% del nivel prebélico y al 100% en 1939 (pp. 393-395).

Mención aparte en este breve repaso del interés de la obra de Sánchez Asiaín merecen sus últimos capítulos destinados a ponderar los efectos de la contienda sobre la infraestructura económica y demográfica de España. En este plano, sus conclusiones revalidan y corroboran estudios previos sin ningún género de dudas (Julio Alcaide, Carlos Barciela, Albert Carreras, Jordi Catalán, Pablo Martín Aceña, Leandro Prados de la Escosura, etc.). La guerra tuvo un altísimo coste para el país en términos materiales y “España tardó 19 años en recuperar sus niveles de preguerra” (p. 965): un desplome de la renta nacional de más del 25% de la registrada en 1929; otro desplome de la renta per cápita de más del 28% de la de ese mismo año referencial citado; una contracción de la producción agraria superior al 21% de la existente en 1935 y otra contracción de la producción industrial que llegaba al 30% de ese nivel de preguerra. En conjunto, el autor se atreve a computar esa catástrofe material de manera muy significativa:

La conclusión final podría ser que el país dejó de producir en los 33 meses de guerra el equivalente aproximado al PIB de un año normal como el de 1935, que ascendió a 37.761 millones de pesetas (p. 971).

Sánchez Asiaín también afronta el desafío de contabilizar las pérdidas humanas y demográficas sobre la base de los estudios previos y sus conclusiones no siempre armónicas ni coincidentes (Juan Díez Nicolás, Javier Rubio García-Mina, Ángel David Martín Rubio, Ramón Salas Larrazábal, Jesús Villar Salinas, etc.). A su juicio, el daño humano cosechado por la guerra podría haber alcanzado, como mínimo, la cifra de 1.458.551 personas en total (p. 983), incluyendo en ese cómputo a unas 329.500 muertes

Reseñas

violentas por acción de guerra o represión en ambos bandos, otras 330.783 muertes por sobremortalidad durante la contienda, otras 200.000 personas exiliadas de modo permanente y en torno a 598.268 personas no nacidas en razón de esas bajas y circunstancias.

En definitiva, esta breve panorámica de la obra de Sánchez Asiaín permite hacerse una idea del profundo interés y firme solvencia del estudio acometido para despejar incógnitas sobre la economía y las finanzas de la guerra civil. Un estudio, además, hecho con suma elegancia estilística que compensa la aridez ocasional de la temática y de la argumentación para los legos o poco duchos en cuestiones fiscales, financieras, monetarias y bancarias. Y hay que agradecer a su autor la realización de lo que denomina con harto exceso de humildad como mera “aproximación histórica” a la temática. Es algo mucho más que eso, sin ningún género de dudas historiográfico. Y cabría añadir que para bien de todos.